

DICTAMEN DE IMPROCEDENCIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE ZACATECAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia le fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

Visto y estudiado que fue el documento en cita, sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen, con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

PRIMERO. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 10 de mayo de 2022, el Diputado José Luis Figueroa Rangel presentó iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el



artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

SEGUNDO. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum 0437, de la misma fecha de lectura, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

TERCERO. El diputado iniciante sustento su propuesta en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la iniciativa se propone reformar la fracción II del artículo 192, para establecer que la caducidad de un juicio puede declararse de oficio, esto es, sin la necesidad de que lo solicite alguna de las partes implicadas en el proceso; y también, se plantea reducir el plazo para que se pueda hacer valer el presupuesto procesal aludido.

Lo anterior, en razón de que el pasado 4 de mayo de 2022, la **Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** determinó que la **caducidad de la instancia opera de pleno derecho** cuando las partes involucradas en el juicio dejan de impulsar el procedimiento dentro del plazo que se prevé en las diversas legislaciones.

Al respecto encontramos que, en el estado de **Durango** la caducidad de la instancia opera en los juicios en que hayan transcurrido 90 días naturales sin que alguna de las partes involucradas en el proceso hubiere realizado alguna promoción solicitando la conclusión del litigio; que



en los estados de **Aguascalientes** y **Nuevo León**, el plazo para que opere la caducidad de la instancia es de 120 días naturales; que en **Guanajuato** y **Coahuila**, el plazo es de 120 días hábiles; que en **Jalisco** y **San Luis Potosí**, el plazo es de 180 días naturales, y que en nuestra Entidad, el plazo para hacer valer la caducidad de la instancia es de 2 años. El más amplio de toda la región.

Esto eleva la importancia de la determinación de la **Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, porque entre otras razones, pretende frenar la proliferación de asuntos en los que no hay avance para su solución y evitar un estado de permanente inseguridad jurídica, por la falta de conclusión de los procesos, de modo que al transcurrir determinados plazos sin que las partes involucradas realicen actuaciones que impulsen los procedimientos hasta la emisión de las sentencias definitivas, se produce la terminación anticipada de los juicios.

De esta forma se libera a las partes de la obligación de seguir en procedimientos en los cuales ya no tienen interés, toda vez que de forma tácita han comunicado la voluntad de abandonarlos, y consiguientemente se estaría apoyando a los órganos jurisdiccionales para que dejen de destinar recursos humanos y materiales en la conservación de asuntos, respecto de los cuales, las partes involucradas ya no muestran interés en su solución.

La conclusión de la **Primera Sala** en la Contradicción de criterios 341/2021, fue que los efectos de la caducidad se producen por ministerio de ley, es decir, que no es necesario ningún procedimiento judicial adicional, derogándose de esa forma los preceptos que establecen que la caducidad de la instancia debe ser declarada a petición de alguna de las partes.

La **Primera Sala** también deliberó que el hecho de requerir a las partes en forma previa a la declaración de la caducidad de la instancia desnaturaliza este presupuesto



procesal, al implicar la tramitación de un procedimiento adicional cuando las partes han externado tácitamente su voluntad de abandonarlo con su inacción.

Por último, la **Primera Sala** precisó que el derecho de acudir a los tribunales queda a salvo aun con la declaración de caducidad de la instancia, ya que no se extingue la potestad de volver a acudir a reclamar sus pretensiones.

MATERIA DE LA INICIATIVA. Reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado en relación con la caducidad de la instancia.

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. Esta Comisión de dictamen considera viable el análisis de esta iniciativa basado en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa de reforma sometida a nuestra consideración, sustentada en lo previsto por el artículo 131 fracción XIX y 132, fracción IV, 152 fracciones I y III de la Ley Orgánica, y 109 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.



SEGUNDO. IMPEDIMIENTO PARA REFORMAR LOS CÓDIGOS CIVILES ADJETIVOS EN LOS ESTADOS. En septiembre de 2017 se aprobó una reforma al artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la cual sólo el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar y de acuerdo con los artículos transitorios, este órgano contaba con la obligación de emitir la legislación en un máximo de 180 días.

Algunas entidades federativas –Coahuila y Aguascalientes– al ver que no se emitía dicho ordenamiento reformaron sus Códigos de Procedimientos Civiles, motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los decretos por carecer de competencia, toda vez que la facultad para emitir ese tipo de normas le corresponde al Congreso de la Unión, en términos de la reforma constitucional citada.

Se estima pertinente señalar que el Senado de la República, el pasado 27 de abril del presente año, aprobó en las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el dictamen por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y



Familiares, restando la revisión y aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

Conforme a lo expuesto, la iniciativa materia del presente dictamen es improcedente, toda vez que esta Legislatura carece de facultades para legislar en materia civil adjetiva.

Por las consideraciones que se han expresado, con fundamento en los artículos 109 y 111 de nuestro Reglamento General, esta Comisión considera que la iniciativa materia del presente dictamen es jurídicamente inviable.

Por lo expuesto y fundado, los y las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el presente Dictamen al tenor siguiente:

ÚNICO. Se declare como improcedente la iniciativa analizada y estudiada en el presente instrumento legislativo, virtud a que resulta jurídicamente inviable por los razonamientos expuestos y, en consecuencia, se ordene su archivo definitivo como asuntos totalmente concluidos.



Así lo dictaminaron y firman los y las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 22 días del mes de junio del año dos mil veintidós.

PRESIDENTA

DIP. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ

SECRETARIA

SECRETARIO

DIP. ZULEMA YUNUEN SANTACRUZ MÁRQUEZ DIP. JOSÉ JUAN MENDOZA MALDONADO

SECRETARIO

SECRETARIA

DIP. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL DIP. MARTHA ELENA RODRÍGUEZ CAMARILLO

SECRETARIO

DIP. JOSÉ GUADALUPE CORREA VALDEZ